

El tráfico de armas en los penales sigue siendo un gran negocio

“El Rodeo desmiente la humanización carcelaria”

Luis Carlos Díaz*



Carlos Nieto Palma es abogado y activista de derechos humanos, lo que le permite abordar el tema carcelario con familiaridad; dicha experiencia le ha hecho merecedor de una medida de protección dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras recibir amenazas por la labor que desempeña

El abogado de 48 años no ha parado un segundo desde que en junio estallara un conflicto en el penal de El Rodeo. Las cifras oficiales reconocen 21 fallecimientos de personas privadas de libertad y un visitante, pero para Carlos Nieto Palma la cifra es superior: las han ido sumando diversos representantes y colaboradores de Una Ventana a la Libertad, la ONG que coordina. Entre los reportes de los reclusos, sus familiares, y los conteos en la morgue, el activista de derechos humanos para la población penitenciaria asegura que el motín pudo ocasionar 68 muertos y 57 heridos, sólo que el ocultamiento de cifras “es común en la justicia venezolana”.

La semana siguiente al conflicto en El Rodeo, el Gobierno nacional procedió a tomar el centro de reclusión y de paso su sede anexa, El Rodeo II, en donde el conflicto entre las fuerzas militares y los reos se extendió durante semanas.

La particularidad de las cárceles venezolanas es que el aumento de sus cifras de muertos y heridos ha ido en paralelo a la posesión de armas de gran calibre bajo el control de los presos. La situación ha sido denunciada en organismos internacionales; de hecho, ocho penales tienen medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado venezolano tome acciones, pero nada ha pasado. El experto advierte que sigue siendo un gran negocio el tráfico de armas a los penales, por eso la situación se complica. El atrinchamiento de los privados de libertad se mantiene.

Nieto Palma no ha parado: se ha ofrecido para mediar, consultar, garantizar que los procedimientos se apeguen a un protocolo de respeto a la vida, acompañar a familiares de reos y además explicar la situación a la prensa nacional e internacional.

–La situación estaba avisada: en algún momento un motín carcelario iba a generar un caos difícil de controlar para un Estado ausente. Sin embargo, ahora que ocurrió ¿sientes que sobrepasó la capacidad de acción de los pocos defensores de DDHH del área?

–Aquí se acompañan casos, pero también evalúas la situación, haces seguimiento y recomendaciones. Tenemos catorce años haciendo este trabajo. Lo que pasó ahora lo decíamos hace años, lo decíamos igualito en diarios de hace seis años. Denunciábamos las mafias carcelarias y las armas que ingresaron desde entonces. Pero esta situación no nos sobrepasó: no ha sido todavía lo dura que puede ser. Seguimos hablando de una situación que estalló en El Rodeo I, pero en las otras 33 cárceles del país pasan cosas similares. Están dadas las mismas condiciones. De hecho se han descuidado a las restantes, pero su arsenal parece ser el mismo.

–¿Y por qué el Estado intervino en El Rodeo I y II y no en otras cárceles?

–Porque esa situación fue una bomba y quisieron mandar un mensaje a las demás cárceles de lo que podía pasarles. Intervinieron militarmente entre comillas. Los militares se quedaron alrededor de El Rodeo II. Cuando militarizas una cárcel en verdad, se trata de la toma completa de la cárcel por la Guardia Nacional. Y veinte días después siguen mandando los reclusos al comando de estos dos pranes: el *Yofre* y el *Oriente*.

Ellos le dijeron al ministro El Aissami que si la Guardia entraba, tenían con qué responder y no tenían problema de pasar meses echándose plomo. Dijeron que tenían armas de largo alcance. Por eso el Estado no entró a la cárcel. Si entran por la fuerza habría una matazón grandísima.

–¿Hay alternativas?

–Que se llegue a un acuerdo, y no se llega porque no han querido crear una mesa de diálogo. No quiero defender a los reclusos, que tampoco lo están haciendo bien en esto. Pero nosotros propusimos una mesa que pudiese estar compuesta por gente experta: Elio Gómez Grillo, Dilia Parra, José Virtuoso, Ligia Bolívar, Liliana Ortega, gente fuera del contexto partidista que pudiese actuar. Pero el Ministerio respondió que no, e hizo otra mesa con el diputado Diosdado Cabello y luego hasta *Satanás* como el mediador. Ellos fueron los que nombraron a *Satanás*, un líder del colectivo La Piedrita, del 23 de Enero.

Ahora hay una propuesta de familiares, por ONG que no conozco, vinculadas a iglesias evangélicas, que tampoco han avanzado. El Ministerio no ha logrado una mediación.

Si la Constitución en el artículo 43 dice que se debe garantizar de manera especial la vida

de los privados de libertad, es difícil que entren a echar plomo. Aparte que este plomo lo metieron ellos. Que ellos no sepan qué hacer ahora es una cosa diferente. Los reos tienen ese arsenal porque los funcionarios se lo dieron. Tienen drogas y tecnologías porque ellos mismos se lo venden. Y es muchísimo dinero en juego.

–¿Pero en la intervención del Estado en el Rodeo I y II se puede considerar que hubo un uso proporcionado de fuerza?

–El Estado fue correcto en no hacer la toma como lo pensaron el primer día, cuando dijeron que tenían miles de militares, paracaidistas y tanquetas... eso era una toma por la fuerza. De ahí surgió una famosa conversación entre el ministro El Aissami y los pranes donde estos le dijeron que estaban dispuestos a echarse plomo. Los del Rodeo I aceptaron irse. Allí hubo diálogo y acuerdos... incluso con mentiras, porque no han cumplido con lo prometido. Pero ahí es donde se produjo la matanza, por eso se desmontó el sistema de jefes (pranes), el liderazgo de pastores evangélicos, porque habían muerto, y todo eso. Fue fácil dialogar.

Sin embargo, no creo que haya habido uso proporcional de fuerza contra los periodistas y familiares que estaban a las afueras esperando información. Hay familiares que buscaron refugio para esconderse, porque los persiguen. La responsabilidad del Estado es informar, entender que la gente quiere saber cómo está su esposo, padre, hermano, y en cambio les echaron gases.

Claro, luego de tomar el Rodeo I quisieron entrarle al Rodeo II y ellos estaban preparados. Su estructura interna estaba intacta. Por eso dijeron que tenían comida y todo para aguantar. Ellos se sintieron con el poder de poner las reglas, cosa que no apoyó.

–¿Cómo no hacer apología del delincuente?

–No los estamos defendiendo a ellos, sino que no haya maltrato en una toma. Cuando hablamos de mediar era para garantizar que la toma de la cárcel siguiera patrones, no a que tuviesen armas en el penal, porque esas no se las llevamos nosotros.

–¿Quién ha metido armas y municiones a las cárceles?

–Una Ventana a la Libertad pidió al Ministerio Público que investigase cómo ingresaban las armas a las cárceles en general y seguimos esperando respuesta. Sin embargo, la Fiscal dijo que haría averiguaciones. Hay cinco personas detenidas, pero esto es una mafia muy grande.

La idea es que haya responsables. Sabemos cómo entran las armas: una cárcel tiene afuera a la Guardia Nacional y adentro a representantes del Ministerio de Interior y Justicia. Los tiros vienen por los que cuidan. Una señora a la que



desvisten, hacen caminar de cuclillas y le revisan sus partes íntimas, no puede meter una ametralladora o una granada en la comida para su hijo. Esas son armas de las Fuerzas Armadas.

–Si los presos disparan contra la Guardia Nacional, ¿Ésta puede disparar de vuelta?

–No deberían porque se debe garantizar la vida, deben tratar de utilizar la fuerza proporcionalmente. El asunto es que la Guardia tampoco les dispara, es parte de la componenda. Esos gobiernos internos de las cárceles formados por pranes, luceros y todo ese gentío no se hace solo. Los dejaron. Ahora tienen que ver qué hacen con su monstruo sin violar las leyes.

–¿Pero no se venía trabajando en un programa de humanización?

–El plan de humanización penitenciaria que se está presentando desde 2006 es un fracaso. Nos quisieron vender que el plan era una maravilla, con una orquesta penitenciaria, que es un logro, pero mínimo. Tenemos otros planes, pero el Estado sólo resalta el suyo. Quisieron que la orquesta tapara todo y esa experiencia impacta a cualquiera, pero la orquesta sólo funciona en tres cárceles y llega a mil 200 reclusos, cuando en realidad son casi 50 mil reclusos. Esto que está pasando, desmonta todo el cuento. De hecho cuando le haces seguimiento ves que la palabra *humanización* fue borrada del vocabulario oficial estos días.

–¿Habrás sido un cambio de estrategia?

–El miércoles 8 de junio el Ministerio hizo un evento en el hotel ALBA, tenían años que no me invitaban, y ahí hablaron de los planes de humanización. Presentaron un *Código Penitenciario*, sin embargo, ahora en la historia del penitenciarismo venezolano habrá un antes y un

después de El Rodeo, porque nos dimos cuenta que aquello no había servido para nada. No se aplica a nuestras cárceles. El ministro El Aissami se trajo científicos criminólogos de la ULA todos muy preparados y estudiosos pero que eran grandes teóricos sin conocer la realidad de la cárcel venezolana. Hicieron un plan que al ver lo es bueno pero no se ejecutó ni hubo intenciones de hacerlo.

Tampoco las cosas no científicas se hicieron, como la construcción de 25 nuevas cárceles pendientes de construir, recuerda que en todas las cárceles hay hacinamiento.

Ese código no tenía una *vacatio legis*, un lapso para que entre en vigencia, porque para que todo lo que está aquí sea aplicable se deben hacer miles de cosas por lo menos en dos años.

–¿Por ejemplo, se le dará respuesta a por qué una madre necesita llevar comida a la cárcel?

–Hay un presupuesto de comida. Ya lo hay. El código también habla de una clasificación de presos altamente científica, con niveles de peligrosidad, tipo de delito y edad, cuando aquí ni siquiera están clasificados los penados de los procesados. El código dice, por ejemplo, que está prohibido el uso de tecnologías. Eso ameritaría otro desarme, pero de celulares, computadoras y otras cosas. Incluso se deberían prohibir las pernoctas familiares de fines de semanas. Pero después de que como Estado lo permitiste, ¿cómo lo retiras? Una de las razones de esa pernocta es para que los familiares den cosas a los reos que el Estado debería cubrir como comida, ropa y otras cosas.

Y el presupuesto de alimentos es una miseria: algo como 17 bolívares diarios por recluso para comida, y hace seis meses era ocho bolívares. Es que ese negocio ha sido un gran negocio desde siempre. La gran diferencia es que hace

quince años quien controlaba el negocio de la comida era el director de la cárcel. Ahora se centralizó eso y es desde el viceministerio que se controlan todos los presupuestos de comida de todas las plantas. Ahora es un grupo más chiquito el que se reparte todo eso.

–Pero hace quince años tampoco se registraba la posesión de tantas armas en las cárceles...

–Hace quince años los reclusos no tenían estas armas. Se tenían chuzos, chopos y otras armas cortantes o de fuego completamente artesanales. Pero de diez años para acá es que se empieza a ver armas normalmente en las cárceles, pistolas de verdad y no tubos con liga y un clavo. Ahí se les descontroló la cosa. En el Rodeo I encontraron paredes con armas y drogas, eso sigue estando repartido en otras cárceles.

–En su discurso el Gobierno repite dos argumentos: el de tiempo para decir que siempre ha sido así, y el de espacio para decir que es igual en todo el continente ¿Qué piensa usted?

–Sí, el sistema siempre ha sido malo. Si no, no hubiesen volado el retén de Catia, que fue como un intento de exorcismo. Pero Catia nunca fue tan malo como esto. Cuando volaron el retén más bien se estaba componiendo. Es verdad que había problemas, pero los índices nunca fueron similares a lo que vemos hoy en día.

Sí, hay violencia en otras cárceles latinoamericanas, pero si nos comparamos con Brasil, que tiene 400 mil reclusos, tuvo unos 115 reclusos muertos en 2010. México tenía como 120 mil reclusos y no hubo más de 35 muertos en sus cárceles. Y Colombia, con 75 mil presos, sólo tuvo catorce decesos intracarcelarios en 2010. Venezuela, con 44 mil presos tuvo 476 personas muertas. Por índice le llevamos una morena. Ni siquiera las cárceles centroamericanas, con maras y narco, tienen nuestro índice de violencia.

–¿Cómo le explicas eso a la CIDH?

–Lo que pasó en El Rodeo es lo más fuerte que ha pasado en una cárcel venezolana en quince años. Lo que le sigue a esto fueron los quemados de 1997 en La Planta, que fue la Guardia quien lo hizo. El argumento del representante de Venezuela, Germán Saltrón, cada vez es el mismo: mete el golpe de Estado de 2002 y otras cosas que no tienen nada que ver, pero nunca ha habido un argumento serio sobre su responsabilidad. Si no, no tuviésemos ocho cárceles con medidas de protección. La más reciente se la dieron a Vista Hermosa, días antes del conflicto en El Rodeo.

–¿Tiene solución esto?

–Esto es un cangrejo al que no le han sabido medir la magnitud. De hecho, desde hace un par de semanas en la agenda oficial tratan de esconder el tema y no hablan de él. No tienen la menor idea de qué hacer. Cuando oyes cosas absurdas como que *no habrá negociación hasta que no se rindan* te preguntas ¿Cómo se rinde un preso al que tienes encerrado? Eso es absurdo. No saben qué hacer. Esto se les escapó de las manos. Y esa desaparición por días de voceros oficiales que hablaran del tema, como el viceministro Edwin Rojas y el secretario del Consejo Superior Penitenciario, Reinaldo Hidalgo, es una muestra del desconcierto.

–¿Qué pasó con el anuncio de un ministerio para las cárceles?

–El desorden vino todo junto. Se comenzó con el nombramiento de un código. Después Chávez anunció el ministerio, luego lo confirmó El Aissami, pero no está en gaceta y pocos días después ocurrió el zaperoco de El Rodeo que les desmorona todas las instituciones que creían que eran una maravilla: el servicio superior carcelario, etcétera.

La creación de un ministerio no está en la Constitución, pero sí dice que hay que crear un ente independiente. Y eso es útil. Se necesita un equipo técnico que pueda descentralizar hacia los gobernadores, como lo dice la Carta Magna. Puede haber un ente coordinador de esas políticas.

Cuando el Gobierno anunció un ministerio, lo hizo con la intención de decir *estamos trabajando*. Estaban creando un ambiente de *todo está bien* cuando les explotó lo del Rodeo en la cara y eso desmontó todo.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.

